

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°185

Medellín, veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **DIANA MARÍA RESTREPO RAMÍREZ** contra el **PAR ISS**, la **NACIÓN (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y MINISTERIO DEL TRABAJO)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se condene a las entidades demandadas a reintegrarla a un cargo de igual o mejor categoría al que venía desempeñando a la fecha de su retiro en el **ISS**; o, en subsidio, los salarios causados desde el **1 de abril de 2015** –día siguiente al de su despido- y hasta el 7 de septiembre de 2015. Así como los aportes al sistema de seguridad social por este periodo.

De otro lado, se condene al **PAR ISS** a reconocer y pagar el reajuste de la indemnización por despido sin justa causa, el reajuste de la sentencia de reliquidación, además de todas y cada una de las prestaciones sociales legales y convencionales solicitadas.

Que se declare que le asiste derecho al incremento salarial del artículo 40 de la CCT y teniendo en cuenta su antigüedad y sobre el salario nivelado hasta diciembre de 2011, debidamente indexado, se reliquiden las prestaciones sociales y convencionales y los aportes a la seguridad social.

Que se condene al **PAR ISS** al reconocimiento y pago de la prima de navidad y a reconocer el reajuste de los salarios liquidados por los años 2008 a 2012 los cuales no fueron cancelados con la asignación de Auxiliar Administrativo Grado 12.

Que se condene al **PAR ISS** a reconocer y pagar el reajuste de los auxilios de transporte y alimentación; y, finalmente, se condene al ex empleador a reconocer y pagar la sanción moratoria por la falta de pago de salarios y prestaciones a la fecha de terminación del contrato de trabajo; o, en subsidio, la indexación.

Hechos

La actora laboró al servicio del **ISS liquidado** desde el día **1 de marzo de 1993** –sic- desempeñándose como auxiliar de servicios asistenciales a través de contratos de prestación de servicios hasta el **31 de agosto de 2008** cuando fue despedida sin justa causa.

Con el fin de que se declarara la existencia de un contrato laboral y se ordenara su reintegro presentó demanda ordinaria laboral, la cual terminó con sentencia favorable a sus intereses en la que se ordenó el pago de prestaciones legales y convencionales. Producto de esta decisión se le reintegró el **18 de diciembre de 2012**.

En desarrollo de la nueva vinculación, el empleador dejó de reconocer y pagar la prima de navidad, así mismo la liquidación del auxilio de cesantía fue deficitaria, puesto que se desconoció que la cláusula convencional que establecía su “congelamiento” desapareció desde el año 2012.

La CCT suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, acuerdo del que es beneficiaria establece beneficios extralegales como el auxilio de transporte y alimentación. Además consagra una tabla de incrementos salariales anuales que deben aplicarse conforme con la antigüedad del trabajador, conceptos que no fueron reconocidos y pagados de forma deficitaria- en el caso del incremento- por parte del empleador.

Las prestaciones sociales finales fueron liquidadas a través de la **Resolución 7816 del 13 de febrero de 2015** en la que se reconoció la suma de **\$43'327.989**, cifra de la que se descontó **\$4'615.983** por concepto de deuda adquirida con una Cooperativa de Trabajo Asociado.

El día **31 de marzo de 2015**, la actora fue nuevamente despedida, desconociendo que por encontrarse en estado de embarazo era beneficiaria del retén social.

Respuesta Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Esta entidad a través de apoderado afirmó de forma general que no le constan los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de relación laboral, inexistencia de solidaridad, inexistencia de sustitución de obligaciones, ausencia de título legal oponible y prescripción.

Respuesta Ministerio de Salud y Protección Social

Minsalud por intermedio de apoderado dijo que no le constan los hechos por lo que deberán ser probados, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación por parte del Ministerio de reubicar o reintegrar a la accionante, inexistencia del derecho a reclamar beneficios convencionales liquidados expresamente, inexistencia de la obligación de pagar prima de navidad y auxilios de transporte y alimentación, inexistencia de la obligación de reconocer sanción moratoria y/o indexación, inexistencia del derecho a reclamar indemnización por despido, inexistencia de la empresa para la cual laboraba la demandante, inexistencia de causa para demandar, inexistencia de solidaridad y prescripción.

Respuesta Ministerio del Trabajo

Esta cartera a través de apoderado, manifestó que no le constan los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la empresa para la cual laboraba la demandante, inexistencia de obligación y prescripción.

Respuesta PAR ISS

El apoderado del PAR dijo que no le constan los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: imposibilidad de

lograr una reubicación por beneficio de reten social, inexistencia de la obligación de reajuste de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales y aportes a seguridad social, inexistencia de la obligación de reconocer sanción moratoria, inexistencia de reconocer el retroactivo de las cesantías y los intereses a las cesantías, inexistencia de la obligación, pago, compensación, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Respuesta Departamento de la Función Pública

Por último, esta entidad a través de apoderada manifestó que no le constan los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de título válido de imputación de responsabilidad y prescripción.

Sentencia de primera instancia

La Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia **26 de febrero de 2021**, condenó al **PAR ISS** administrado por **Fiduagraria S.A.**, a liquidar y pagar a la demandante, los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales causados a partir del 1 de abril de 2015, y hasta las dos semanas anteriores a la fecha de nacimiento de su hijo o hija.

De otro lado, condenó al **PAR ISS** a reconocer y pagar, la suma de **\$3.047.994** por concepto de primas de navidad, sumas que deberán ser indexadas y declaró probada la excepción de cosa juzgada con respecto a los reajustes salariales de los años 2008 a 2012.

Esta decisión no la compartieron la apoderada de la demandante y el apoderado del PAR ISS, los cuales expusieron su inconformidad en los siguientes términos:

Recurso Demandante

La recurrente solicita que se **revoque parcialmente** la decisión de primera instancia, en los siguientes aspectos:

- **Condena al pago de auxilio de cesantía e intereses.** No se debió absolver de la condena al pago del auxilio de cesantía y sus consiguientes intereses, por falta de prueba, pues se debió imponer su pago de forma abstracta o se insistía en el oficio librado por la juez de primera instancia.

Superada esta situación, se debe tener en cuenta que para la fecha en que se terminó el contrato de trabajo de la actora, las cesantías se debían liquidar de forma retroactiva sin aplicar la congelación a la que hace referencia la CCT.

- **Auxilio de transporte y alimentación:** Solicita que se estudie esta pretensión en caso de que el Tribunal la encuentre procedente.
- **Pago de los salarios de Auxiliar de Servicios Asistenciales Grado 12:** Expresa que no existe cosa juzgada, toda vez que, fue el ISS el que la reintegro en este cargo, desconociendo la remuneración que se reconocía para este cargo, por lo que es necesario que se reconozcan dichos valores.
- **Reajuste artículo 40 CCT,** como quiera que estos conceptos fueron descongelados desde el año 2012 y debieron reconocerse teniendo en cuenta que la actora tiene una antigüedad de prestación de servicios de más de 20 años.

Recurso PAR ISS

El apoderado del **PAR ISS** solicitó que se absuelva de la condena al pago de salarios causados a partir del 1 de abril de 2015, y hasta las dos semanas anteriores a la fecha de nacimiento de su hijo o hija, por encontrar que el estado de embarazo de la actora solo fue comunicado al empleador con posterioridad a la notificación de la terminación, debiéndose tener en cuenta por lo demás que no se trata de una finalización caprichosa del contrato, sino por la liquidación definitiva de la entidad pública.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, no se presentaron alegaciones.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Establecer si el **PAR ISS** conocía que la señora **Diana María Restrepo Ramírez** se encontraba en estado de embarazo para la fecha en que fue terminado el contrato de trabajo y que consecuencias se derivan de la terminación del vínculo laboral, (ii) Determinar si se configura la excepción de

cosa juzgada con respecto al reajuste salarial del cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales Grado 12, (iii) Establecer si es procedente la condena al pago del auxilio de cesantía e intereses (iv) Determinar si procede el pago de los auxilio de alimentación y transporte, así como el reajuste del artículo 40 de la CCT teniendo en cuenta la antigüedad de la demandante y (v) finalmente, revisar si procede la condena al pago de la prima de navidad.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Diana María Restrepo Ramírez** promovió proceso ordinario laboral contra el **ISS**, radicado bajo el consecutivo 05001-31-05-009-2009-00504-01, trámite en el que solicitó la declaratoria de contrato realidad y su reintegro al cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales con el consecuente pago de incrementos salariales y prestaciones legales y extralegales (01/págs.33-35).
2. Estas peticiones fueron estimadas en sentencia del 30 de marzo de 2012, por el Juzgado Trece Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín (01/págs.33-52).
3. El **ISS** a través de **Resolución 0225 del 11 de diciembre de 2012**, en cumplimiento de la sentencia judicial, reintegro a la actora ubicándola en el cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales, Grado 12 A (01/págs.54-55).
4. A través de oficio **07454 del 5 de febrero de 2015**, el liquidador del ISS le comunicó a la actora que su contrato de trabajo terminaría por causa legal el día **31 de marzo de 2015** (01/pág.83).
5. A la demandante le fue liquidado el auxilio final de cesantía, la indemnización por despido injusto y otras prestaciones sociales, por intermedio de la **Resolución 7816 del 13 de febrero de 2015**, reconociéndole una suma total de **\$47'043.972** por el periodo comprendido entre el **4 de junio de 2003** y el **31 de marzo de 2015**, de la que se descontaron **\$4'615.983** por concepto de descuento legal o/y autorizado (01/págs.84/85).
6. Por intermedio de la **Resolución 10169 del 30 de marzo de 2015**, el **ISS** reconoció que su trabajadora se encontraba en estado de embarazo por lo que procedió a reajustar el valor de la indemnización por despido,

reconociendo el pago de la sanción de 60 días y el reconocimiento de la licencia de maternidad por 98 días (01/págs.89-90).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

De la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de gestación ante la liquidación entidades públicas

Es motivo de recurso por parte del apoderado del **PAR ISS** la orden de reconocer y pagar los salarios y prestaciones causadas entre el 1 de abril de 2015 y las dos semanas anteriores al nacimiento del hijo/a de la demandante, por cuanto a su juicio, la actora no tenía una estabilidad laboral reforzada, puesto que, solo demostró su estado de embarazo con posterioridad a la comunicación de la terminación del contrato y la finalización del vínculo tuvo una causal objetiva consistente en la liquidación del **ISS**.

En lo referente a este aspecto particular, la juez de primera instancia manifestó que, teniendo en cuenta la protección especial consagrada en el artículo 43 de la Constitución en favor de las mujeres en estado de embarazo y las subreglas jurisprudencias desarrolladas por la Corte Constitucional para su protección ante la liquidación de entidades públicas que se contienen en las sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018, lo procedente es ordenar el pago de los salarios y prestaciones hasta que se configure el derecho a la licencia de maternidad.

Para atender al recurso presentado, es necesario recordar que en efecto la Corte Constitucional ante las diferentes interpretaciones existentes acerca de la protección generada por el fuero de maternidad expidió la sentencia SU-073 de 2013, en la que la que enlistó 9 reglas jurisprudenciales que deben ser consultadas al momento de estudiar el despido de una mujer en condición de embarazo, lo que se enlistan a partir de la alternativa laboral de la trabajadora y generan un grado de protección en virtud del conocimiento que del estado de embarazo tuviera el empleador, este último aspecto modificado en la SU-075 de 2018, en la que se cambió el precedente en materia de conocimiento del empleador de forma exclusiva para los contratos a término indefinido, por obra o labor y fijo¹.

¹ Como se advirtió, existen tres eventos en los cuales es legítimo cambiar el precedente vigente. En esta oportunidad, la Sala considera que procede la modificación jurisprudencial por la tercera de estas causales, es decir, la regla mencionada resulta contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se erige el ordenamiento jurídico.

Según lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-075 de 2018, las alternativas laborales a las que no se hace alusión en ese fallo continúan bajo el precedente establecido en la sentencia SU-070-2013, siendo este el caso de la demandante, cuya condición era la de trabajadora de una entidad pública liquidada, y ello implica que el conocimiento del empleador no sea un factor relevante, puesto que, se trata de personas cuyos derechos subjetivos se refuerzan por el principio de estabilidad en el empleo², generándose en su favor una protección que conforme con el Alto Tribunal consiste en que desde la fecha de terminación del contrato se proceda en el *“pago de los salarios y prestaciones hasta que se configure el derecho a la licencia de maternidad.”*.

En ese orden, demostrado que la actora prestó sus servicios para una entidad pública y que esta fue liquidada y su cargo suprimido en desarrollo de su embarazo, no encuentra un desconocimiento por parte de la juez a-quo del precedente jurisprudencial vinculante y en ese sentido se **confirmará** el fallo apelado.

De la excepción de cosa juzgada con respecto al reajuste salarial del cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales Grado 12 por los años 2008 a 2012

la actora en la pretensión quinta de la demanda, solicita que se condene al **PAR ISS** a reconocer el reajuste de los salarios liquidados para los años 2008 a 2012, los cuales no fueron pagados con la asignación correspondiente al cargo de auxiliar administrativo grado 12.

Esta pretensión se sustenta en el hecho décimo cuarto, conforme al cual el ISS al dar cumplimiento a sentencia judicial que ordenó su reintegro...*lo efectuó en forma deficitaria, pues no se tuvo en cuenta el salario real conforme al cargo y grado que desempeñaba...* (01/pág.11).

determinada, según la cual el empleador, aun cuando efectivamente demuestra que no conocía del estado de embarazo de la trabajadora y que su despido no obedeció a tal razón, debe asumir el pago de los aportes a la seguridad social requeridos para cubrir su licencia de maternidad, o incluso se ordenaron reintegros y/o pagos de licencias de maternidad contraría el fundamento de las acciones afirmativas para las mujeres y su protección en el ámbito laboral.

²Las distintas medidas de protección acordadas en los anteriores supuestos (8, 9 y 10) encuentran sustento en el establecimiento del sistema constitucional de provisión de cargos mediante concurso de méritos, que justifica que “los servidores públicos que se encuentren inscritos en la carrera administrativa ostenten unos derechos subjetivos especiales que refuerzan el principio de estabilidad en el empleo”. Lo anterior por cuanto la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en la importancia del mérito y de los concursos como ingredientes principales del Régimen de Carrera Administrativa: sistema de promoción de personal característico de un Estado Social de Derecho

Con respecto a este *petitum* la juez a-quo, dio una respuesta negativa declarando la cosa juzgada, por advertir que el mismo ya fue conocido por la jurisdicción en el proceso con radicado 05001-31-05-009-2009-00504-00, puesto que, en la sentencia dictada en aquella oportunidad se dio respuesta negativa a la aspiración de nivelación salarial que presentó la actora, además en la misma se dispuso cuáles serían los efectos del reintegro, por lo que teniendo en cuenta que el reajuste de salarios que se reclama está ligado con dicha orden, el eventual incumplimiento o pago deficitario de la sentencia, bien pudo ser expuesto en proceso ejecutivo.

Para resolver esta controversia, se debe tener en cuenta que la misma se encuentra indudablemente vinculada al proceso del que conoció el Juzgado Trece Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, puesto que, la **Resolución 0225 del 11 de diciembre de 2012**, fue expedida con la finalidad de dar cumplimiento al mismo y en este acto administrativo se expuso las condiciones en que se haría el respectivo reintegro y el reconocimiento de los derechos derivados del mismo, por lo que si algún incumplimiento o pago deficitario existía, bien pudo reclamarse del demandando teniendo como título ejecutivo la sentencia.

Conforme con las razones expuestas advierte la Sala que fue acertada la decisión de primera instancia, por lo que se **confirmará**.

De la aplicación de carga probatoria

La juez de primera instancia al estudiar las pretensiones encaminadas a la reliquidación del auxilio de cesantía y sus intereses, absolvió a la parte demandada de su reconocimiento, por advertir que no cumplió la demandante con la carga procesal de aportar los elementos de prueba necesarios para la estimación de su pretensión.

Esta conclusión es atacada por la apoderada de la actora señalando que no le fue posible obtener la prueba solicitada, sin embargo, bien puede proferirse una sentencia en abstracto que estime sus pretensiones o insistir a la entidad demandada para que aporte la prueba que dé cuenta de los pagos parciales realizados y así establecer el valor adeudado por auxilio de cesantía.

En lo que refiere a este punto particular no discute la apelante la ausencia de prueba, así como la carga que le competía, sin embargo, solicita se le exonere de la misma solicitando que se imponga una condena en abstracto, sobre la base de que al aplicarse las cesantías retroactivas, el valor a reconocer en favor de la actora es superior al reconocido por el **ISS**.

Para resolver esta solicitud, lo primero que debe dejarse en claro es que no erró la juez de primera instancia al imponer las consecuencias del incumplimiento de la carga probatoria a la parte demandante, puesto que, era a esta a la que en los términos del artículo 167 del CGP le correspondía demostrar, cual fue el valor reconocido por auxilio de cesantía para a partir de allí determinar si existió un pago deficitario, pero adicional a ello bien vale la pena recordar que como lo ha enseñado la jurisprudencia especializada cuando se pretenda la reliquidación de prestaciones sociales, es fundamental que la parte que las reclama haga determinable el valor de lo adeudado, aspecto bien explicado en la sentencia radicado 40997 del 14 de junio de 2011, en la que al respecto se dijo:

De todas maneras, independientemente de cuál de las partes corre con la carga de demostrar lo que echó de menos el Tribunal, lo cierto es que el actor no cumplió con su obligación de, al menos, señalar en su demanda, como elementos de la causa petendi, precisamente los puntos cuya prueba no encontró el ad quem, esto es, los hechos en que fundaba su pretensión de reliquidación de las primas de navidad, de junio, de servicios, de vacaciones y de antigüedad, o sea, cuánto se le pagó por esos conceptos y por qué se le quedó debiendo, pues de otra manera, que fue lo que ocurrió, su pretensión quedaría indeterminada, por lo que no podía asumirla el sentenciador, bajo unos supuestos no aducidos ni discutidos en el proceso, ya que, de hacerlo violaría el derecho de defensa de la demandada, que se vería obligada a afrontar una reclamación imprecisa sobre unos supuestos no determinados, que en últimas serían concretados por el juez en la sentencia, cuando ya no habría oportunidad de contraprobar.

De tal manera que no asiste razón en la censura en cuanto alega que al actor solo le bastaba aducir la falta de pago de sus salarios y prestaciones, así sea parcial, para que la demandada se vea avocada a contraprobar, pues además era necesario a aquél concretar desde el inicio, en la demanda, cuáles eran sus pretensiones (objeto) y el motivo que las generaba (causa petendi), para así determinar claramente los extremos de la litis, y garantizar un equilibrio verdadero entre las partes en el debate probatorio.

En lo que toca con el caso de autos, en efecto se advierte que la pretensión fue presentada de forma genérica dirigida a la reliquidación del auxilio de cesantía, lo que unido a la desatención en cuanto a la carga probatoria, no

permite estimar lo solicitado por la demandante, por lo que en este sentido se **confirmará** el fallo apelado.

Reajuste del auxilio de transporte y alimentación

La demandante solicita que se reajuste el valor de los auxilios de alimentación y transporte consagrados en los artículos 53 y 54 de la CCT, pretensión negada por la juez a.-quo argumentando que no se demostró cual fue el valor de estos auxilios en el año 2001, para a partir de allí determinar su el valor reconocido si fue actualizado conforme con el IPC de cada anualidad, por lo que al no cumplir esta carga probatoria, se deben desestimar las pretensiones.

En lo que refiere a estos conceptos esta Sala advierte que no existe un argumento de oposición que deba estudiarse en sentido estricto, toda vez, que lo manifestado por la recurrente en este caso no pasa de ser una mera inconformidad injustificada con el fallo, sin embargo, si respecto del argumento sostenido por la juez existiera alguna discusión, encuentra la Sala que su lectura de la norma convencional y su exigencia fue plausible.

En este punto, no está por demás expresar que esta exigencia ha sido realizada por la Sala Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia SL-3968-2018 al conocer de una pretensión similar, expresó:

No es procedente condenar por este concepto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 convencional (f.º206), ya que no se acreditó el valor que se cancelaba al 31 de diciembre de 2001; ello en la medida que esa disposición prevé:

A partir de lo anterior, advierte la Sala que la interpretación que de los textos convencionales hizo la juez a-quo fue caprichosa, no fue caprichosa por lo que se **confirmará** la sentencia absolutoria en estos aspectos.

Del incremento adicional sobre los salarios básicos por servicios prestados al ISS (art.40 CCT)

La apoderada de la parte actora insiste que en virtud de la descongelación de los efectos del artículo 40 convencional debe procederse a reconocer en favor de la demandante a partir del año 2012 y teniendo en cuenta la antigüedad de la actora el porcentaje del aumento debe ser del 11 % y no del 8% como se reconoció por parte del ISS.

En lo referente con esta manifestación encuentra la Sala que no ataca el argumento en que se fundamento la decisión de primera instancia, consistente en que para la estimación de esta pretensión era necesario que se aportada la CCT anterior, pues era a partir de ella que podía cual era la cuantía devengada por la trabajadora.

En este punto, encuentra la Sala que no existe una sustentación de la inconformidad frente a lo resuelto, pues lo manifestado por la recurrente se concreta en una mera inconformidad con sus aspiraciones, debiéndose anotar por lo demás que en la misma se afinca en una interpretación errada de la norma convencional, consistente en que se desconoce que el incremento estipulado por las partes, se pactó por única vez para el tercer año de vigencia, -que correspondía al 1.º de enero de 2004- y en esa medida el aumento se realizaba porcentualmente con los servicios prestados para aquel momento, iniciando con las personas que tuvieran un año de servicios prestados, lo que en el caso de la actora no se cumple, pues ingresó a laborar el **4 de junio de 2003**³ llevando al servicio de la entidad para la fecha de aplicación de esta norma apenas de 6 meses de vinculación.

Con fundamento en estas razones se **confirmará** la decisión recurrida en este aspecto particular.

De la condena al pago de la prima de navidad

En lo que toca con este punto que se revisa en virtud del grado jurisdiccional de consulta, se debe recordar que la prima de navidad es una prestación social legal reconocida a los trabajadores oficiales, consagrada en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, que consiste en el pago de un mes de salario en la primera quincena del mes de diciembre.

Con respecto a los trabajadores oficiales del ISS esta prestación fue negada por advertirse una supuesta incompatibilidad con la prima de servicios consagrada en el artículo 50 de la CCT, tesis contenida entre muchas otras en la sentencia radicado 35954 del 15 de mayo de 2012, sin embargo, este precedente fue recogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en la actualidad sostiene que es procedente la prima de navidad, en razón a que no existía dentro de la CCT una prima anual extralegal *similar*, puesto que, la cláusula 50 de del texto convencional lo que consagró fue la prima semestral de servicios para compensar la legal.

³ Como se lee en la sentencia que declaró la existencia del contrato realidad (01/pág-51).

En ese orden, resulta evidente el derecho que le asiste a la actora a disfrutar de la prestación reclamada y que si bien fue pagada por su empleador, luego del reintegro de forma inexplicable dejo de cancelar, por lo que en este punto se **confirmará** la decisión condenatoria de primera instancia.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín, el día **26 de febrero de 2021**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por la señora la señora **DIANA MARÍA RESTREPO RAMÍREZ** contra el **PAR ISS**, la **NACIÓN (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y MINISTERIO DEL TRABAJO)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Diana María Restrepo Ramírez
Demandado	Par ISS, la Nación (Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio del Trabajo) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Radicado	05001-31-05-013-2016-01447-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 29 de julio de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 29 de julio de 2022 a las 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO